

Theodor Rathgeber

Cooperación interandina: organizaciones indígenas como actores internacionales

1. Introducción

El uso del término “Cooperación interandina” se emplea en la mayoría de sus connotaciones para describir el intercambio comercial y la colaboración técnica, aun cuando, en realidad, este tipo de cooperación entre los países andinos sea todavía bastante débil. A continuación, sin embargo, me voy a referir a este tipo de cooperación en tanto base social en la que actúan las organizaciones indígenas en su rol de actores sociales. Y es que, a pesar de las circunstancias históricas y geográficas desfavorables, las organizaciones indígenas están intentado imponer a la cooperación interandina una agenda propia para que se incluya su perspectiva en el debate sobre el futuro de la región andina. De esta manera, los proyectos de cooperación presentados tanto por movimientos como por organizaciones indígenas son ejemplos claros de una búsqueda alternativa a la actual forma de organización social, dentro de los países andinos en particular y dentro de la región en general.

Mientras que en los años '70, en su trabajo sobre raza, etnicidad y pluralismo cultural, Crawford Young concluía que en América Latina los indígenas no se podían considerar como actores colectivos ni como sujetos de su propia historia (Young 1976), “los indígenas” son hoy uno de los actores sociales más importantes en los intentos de determinar un futuro democrático para América Latina.¹ Ya son varios los ejemplos en los cuales las organizaciones y los movimientos indígenas demostraron su capacidad como actor social. Esto debido a: a) su perseverancia en contrarrestar las pautas de desarrollo predominante (o sea las de producción a escala industrial) como forma de evolución; b) su organización para protestar contra el empobrecimiento social en

1 Ver Bennett (1998); Van Cott (2000); Otero (2003); Postero/Zamosc (2004b); Sevilla/Ströbele-Gregor (2008).

el contexto de la globalización de índole neoliberal, convirtiéndose en punto de referencia para las luchas sociales sobre todo en Colombia, Guatemala, Bolivia y Ecuador; c) al fomento del desarrollo sostenible en tanto modelo que más se acerca a su modo de producción histórica; d) su participación institucional en los diferentes niveles del Estado, reivindicando tanto la descentralización como la democratización estatal y poniendo énfasis en el ámbito comunal como base para la toma de decisiones. Es de destacar, además, que sobretodo en los años '90, los movimientos indígenas actuaron en las luchas de los sectores marginalizados.

Sin embargo, dentro del marco del “retorno del indio” en América Latina (Albó 1991), hay variaciones importantes, si se comparan el modo y el grado organizativos tanto a nivel regional como estatal. En la zona andina, específicamente, se puede observar que las comunidades indígenas aún hoy se encuentran fragmentadas y que hay pocas entidades colectivas que representan políticamente los intereses comunes. En el Perú –donde la población indígena constituye aproximadamente el 40% de la población nacional– no existe una unión que los represente a nivel nacional, así como tampoco la hay en Bolivia, Chile y Argentina. A nivel local-regional, no obstante, algunas organizaciones indígenas han desarrollado un mayor protagonismo político, principalmente en las tierras bajas de Bolivia y Perú. Algo parecido sucede en Guatemala, por lo que se puede constatar que las movilizaciones indígenas en la zona andina emergen alrededor de tópicos “políticos” y “culturales”, no “territoriales” (Alvarez/Dagnino/Escobar 1998; Postero/Zamosc 2004a; Ströbele-Gregor 2004).

Un ejemplo de esto es la situación en Bolivia. La organización con más impacto político en la demanda un reglamento territorial se concentra en las tierras bajas (en la zona de la selva) y es la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) que representa a 34 nacionalidades indígenas. En la zona andina existe el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el movimiento de cocaleros liderado por el actual presidente de Bolivia, Evo Morales (Movimiento al Socialismo, MAS), y el movimiento Felipe Quispe que trata de reestablecer el *Kollasuyo* aunque lo hace desde la base de un nacionalismo excluyente (Postero/Zamosc 2004a; García/Lucero 2004; Postero 2004). Por ejemplo,

el CONAMAQ, fundado en 1997 por representantes de los pueblos aymara y quechua, está organizado en comunidades indígenas en cinco departamentos de Bolivia (Oruro, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí). CONAMAQ intenta reorganizar la zona andina a través de la fórmula de las Tierras Comunitarias de Origen, incluyendo tanto el derecho consuetudinario así como las normas y los valores históricos (Postero 2004).

En contraste, en Colombia (ONIC) y Ecuador (CONAIE)² existen dos organizaciones a nivel nacional que con cierta razón reclaman la representatividad política para el conjunto de las comunidades indígenas en ambos países. Ellas promueven activamente la revitalización de las culturas de lenguas indígenas, reclaman derechos colectivos e imponen temas de soberanía y autodeterminación a la agenda del Estado. De todas maneras, la cooperación interandina, al intentar generar lazos organizativos intranacionales, enfrenta ya de por sí un gran reto, particularmente para la zona andina.

De manera general se puede decir que la cuestión organizativa es ya a nivel regional compleja y bastante difícil y que, consecuentemente, la cooperación entre los Estados-gobiernos aún lo es más. Una de las organizaciones que logró ser bastante reconocida y que tiene cierta importancia es la COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica) que existe desde el año 1987. A pesar de tener muchos problemas internos la COICA reúne a las organizaciones indígenas más importantes y representativas de la región del río Amazonas, quienes apuestan a un futuro desde su propia perspectiva.³ En Centroamérica, surgió una coordinación regional dirigida contra el Plan Puebla-Panamá (PPP): A través del Consejo Indígena de Centro América (CICA) se organizaron varios encuentros del llamado Foro Mesoamericano (Chiapas 2001, Guatemala 2001, Nicaragua 2002, Honduras 2003) para articular la negociación al Plan y reivindicar un modo de consultación que permitiera a las comunidades indígenas afectadas participar efectivamente en la discusión del PPP (Rathgeber 2004).

2 ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) <www.onic.org.co>; CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) <www.conaie.org>.

3 <www.coica.org.ec>.

Existe, asimismo, una plataforma de organizaciones indígenas a nivel latinoamericano que aunque no esté organizada de manera formal, intenta contrarrestar la globalización y sus impactos y aglutina la protesta contra la globalización de índole neoliberal –particularmente contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)– y contra los efectos de los tratados de libre comercio (TLC).⁴ Esta plataforma contribuyó de manera sustancial a organizar las protestas, en particular durante el encuentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC/WTO) en Cancún (México) en 2003 y durante los encuentros del Foro Social Mundial en Porto Alegre. Las organizaciones, los movimientos y los grupos indígenas participantes insisten en el hecho de que las políticas de globalización neoliberales les obligan a buscar soluciones conjuntas.

Paralelamente a las cumbres continentales y regionales de los pueblos y las nacionalidades indígenas, las mujeres indígenas se reúnen regularmente en encuentros propios, aunque todavía solo a nivel regional. En el contexto de la región andina cuentan con la representación de mujeres de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Adicionalmente a las exigencias incluidas en la agenda ordinaria de las cumbres indígenas, los encuentros de las mujeres exigen la apertura de espacios para la su participación en igualdad de condiciones, para acabar con la práctica de invisibilidad y superar su exclusión y marginación.

Con estos ejemplos, intentamos ilustrar la dimensión en grado y modo de lo que significa la cooperación entre organizaciones y movimientos indígenas en el contexto latinoamericano. En ellos se intenta discutir, generar y poner en práctica otro modo de vida y otra forma de organizar la sociedad. Habiendo dicho esto, a continuación discurriré sobre la cooperación interandina desde la perspectiva de las organizaciones indígenas, refiriéndome a los intentos de reorganización y reestructuración social de las sociedades andinas a nivel regional. Asimismo mostraré algunas iniciativas existentes en países como Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Chile, siendo Bolivia, Ecuador y el Perú los países con mayores porcentajes de personas de origen indígena en relación al total de la población nacional.

4 Véase el manual de SERVINDI (2004).

La cooperación y coordinación a nivel andino entre las comunidades y los pueblos indígenas no es nada nuevo. Entre los pueblos indígenas de los Andes se han tejido relaciones históricas a través de intercambios recíprocos, por ejemplo, a través del trueque entre distintas zonas climáticas. Lo que sí es nuevo es la forma de cooperar y coordinarse voluntariamente para involucrarse en la toma de decisiones políticas a nivel regional.

2. Contexto andino

Se estima que en América Latina, actualmente, existen alrededor de 400 pueblos y 50 millones de personas indígenas; aproximadamente el 10% de la población total del área. El 90% de la población indígena se concentra en cinco países: Guatemala, México, Perú, Bolivia y Ecuador y en los Andes se concentra la mayor cantidad de población indígena de la subregión andina. Bolivia registra 5 millones de indígenas, siendo los indígenas andinos aproximadamente 2 millones, repartidos en ayllus y marcas del altiplano boliviano. En Ecuador los indígenas representan el 35% de la población total, siendo los andinos casi 4 millones, distribuidos principalmente en 14 pueblos de nacionalidad kichwa. En el Perú, la población indígena representa el 47% de la población, siendo los indígenas andinos, quechuas y aymaras, más de 8,6 millones de personas. En Chile, las comunidades indígenas representan aproximadamente el 10% de la población, siendo mayoritariamente mapuches. En la Argentina hay aproximadamente 400.000 miembros de comunidades indígenas, de los cuales la mitad pertenece a la zona andina. En Colombia existen alrededor de 85 pueblos indígenas concentrados en la zona andina y en el Pacífico, los que suman cerca de 800.000 personas y representan un 2% de la población total (Barié 2003; Postero/Zamosc 2004a; GTZ 2004).

Obviamente, la discusión sobre quién debe ser considerado indígena en la zona andina podría ser larga, cuestión esta que, sin embargo, no vamos a tratar en detalle dentro de esta ocasión debido a su complejidad (Postero/Zamosc 2004a; Ströbele-Gregor 2004). Basta por el momento con decir que en la zona andina, por razones históricas, la identidad de un miembro de una comunidad originaria o indígena es social y culturalmente fragmentada: siendo identificado por el discurso dominante como campesino, cooperativista, sindicalista, mi-

nero etc., el término “indígena” queda reservado para los “nativos” de la selva, con las connotaciones peyorativas correspondientes. A raíz del auge del movimiento indígena a nivel continental desde los años '70 y debido a sus logros sustanciales (Postero/Zamosc 2004a), hay una tendencia creciente a autoidentificarse como “indígena” (u “originario”) dentro de los mismos comuneros, lo que, por otro lado, les permite ser partícipes de algunos beneficios políticos, económicos o sociales. Sin embargo, es de destacar que se trata de un constructo discursivo y de un instrumento lingüístico multifuncional, que le otorga a las personas y a las comunidades una cierta marca de autenticidad con la que se pueden posicionar dentro de la sociedad a pesar de seguir siendo objeto de discriminación.⁵ Esta forma de autoidentificación, por lo tanto, no es gratuita, pero les permite poner énfasis en la articulación de su propia identidad en medio de las cambiantes circunstancias que supone el proceso de globalización.

Este proceso incrementa la necesidad de actuar en conjunto basándose en algunas pautas culturales históricas. Los pueblos y las comunidades andinos siguen enfrentando los impactos de la globalización con una actuación poco coordinada que, obviamente, constituye una desventaja profunda, ya que la poca coordinación limita el acceso a los diversos espacios internacionales de debate y de derechos. Además, se están acelerando los conflictos entre las comunidades y los pueblos indígenas en relación al acceso y a la utilización de los recursos ecológicos, económicos y humanos ubicados en sus territorios, conflictos que son agravados e instrumentalizados por el Estado-nación y por los inversionistas privados, que limitan así aún más su capacidad de interferir en los asuntos internos de los respectivos países y la autodeterminación sobre su propia forma de vida.

Dadas las fragmentaciones históricas y la situación compleja de las comunidades, no hay un modelo único o privilegiado de organización indígena o movimiento social. A pesar de la complejidad, la agenda de homogenizar las reglas básicas para promover el libre comercio genera la necesidad de especificar cómo reorganizar y reestructurar la sociedad americana para que aquellas comunidades que se

5 Ver CAO/CONACAMI (2009), un informe alternativo de las organizaciones indígenas presentado en agosto 2009 en Ginebra a través de <www3.minkandina.org/Noticias/Peru/162.html> (agosto 2009).

identifican como indígenas u originarias tengan la oportunidad de participar en la toma de decisiones sobre su propio futuro.

3. Cooperación interandina y reorganización sociocultural

En la historia reciente, en varios países de la región andina surgieron movimientos indígenas que se fortalecieron a lo largo de la década de los '80. En su comienzo combinaban las luchas campesinas de las comunidades agrarias de los altiplanos y sierras con la revitalización étnica de los pueblos de los bosques tropicales. Uno de los ejemplos mas contundentes a nivel nacional es hasta ahora la lucha contra la política neoliberal en Ecuador a través de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que se ha vuelto un actor determinante aún en ámbitos políticos aunque más de una vez haya sido absorbida por conflictos internos (Zamosc 2004).

En la misma década surgió la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) que se fundó en 1979 y que actualmente aglutina alrededor de 200 grupos, distribuidos en 9 Federaciones departamentales que representan los intereses de los moradores del altiplano.⁶ Durante los años '90, la CSUTCB revaloró su base cultural –hasta entonces limitada a la lengua aymara– y la extendió incluyendo en ella a los guaraní y a los quechua. Tiene lazos con la CIDOB que, a su vez, agrupa a la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y otras federaciones indígenas. La CSUTCB jugó un papel importante en las manifestaciones contra el entonces presidente de Bolivia, Carlos Mesa, en el año 2005. En 2008, la CSUTCB adhirió a las críticas contra la producción de agrocombustible que va en detrimento de la producción alimenticia. La CSUTCB busca ahora coordinarse con otras organizaciones indígenas de la zona andina.

En el altiplano del Perú existe desde octubre de 1999 la Coordinadora Nacional de Comunidades Adversamente Afectadas por la Minería (CONACAMI) (García/Lucero 2004). Mientras que en el primer congreso de la organización la mayoría de las comunidades representadas por esta coordinadora era de origen quechua y ésta se limitaba a exigir compensaciones por el uso de las tierras mineras en el área na-

6 <www.csutcb.org> (abril 2008).

cional, en la actualidad, CONACAMI está poniendo mayor el énfasis en la cuestión de la cultura indígena, localizando sus luchas dentro del marco más amplio de los “derechos humanos y los derechos de pueblos indígenas”. Dentro del contexto de la cooperación interandina, el papel más visible de CONACAMI como actor indígena se relaciona con programas de intercambio para que sus líderes puedan compartir experiencias con organizaciones indígenas de Ecuador (CONAIE) y de Bolivia (CONAMAQ). Estos programas son financiados a través de Oxfam América que ha apoyado el trabajo de CONACAMI desde su inicio. La cooperación interandina la lleva a cabo la CONACAMI también en el marco de encuentros transnacionales como las Cumbres Indígenas de las Américas y el Foro Social de las Américas juntándose a las protestas contra las reformas neoliberales y promoviendo los derechos de los pueblos indígenas.

Dentro del Perú, CONACAMI trabaja con el foco puesto en las concesiones que han sido otorgadas a las compañías mineras transnacionales, trabajo iniciado a mediados de los 1990 cuando se organizaron las protestas contra la industria minera que obtenía ganancias a costa de las comunidades de la sierra. Como las compañías mineras –muchas de Canadá– actuaban de forma legal, éstas denunciaron a los que organizaron la protesta, acusándoles de desarrollar actividades criminales. Es de destacar que entre los organizadores se encontraba Miguel Palacín, actual líder de CONACAMI, quien fuera forzado a dejar la sierra y a refugiarse en la costa. Un hecho que resulta emblemático para ejemplificar lo ambiguo de la globalización es que Miguel Palacín recibió apoyo del Norte del continente: unas organizaciones indígenas de Canadá (*First Nations*) se enteraron de la situación a través de Internet y, dada su experiencia debido a sus propios conflictos con las industrias extractivas,⁷ fueron ellas la que elevaron una queja formal para que el Estado peruano investigara los cargos contra Miguel Palacín. El fiscal del Estado, finalmente, no habiendo encontrado justificación jurídica alguna, mandó a que se retiraran los cargos en su contra. Como Miguel Palacín es una figura central de CONACAMI, hay opiniones críticas sobre esta organización a pesar de ser

7 En relación a la cooperación indígena y a sus enfrentamientos con la industria extractiva véanse, por ejemplo, los documentos de la ONU (2002); Feldt (2004); OHCHR (2008).

una de las organizaciones indígenas más coherentes de la zona andina del Perú.

El actor internacional de mayor envergadura dentro de la cooperación interandina es hasta el momento la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).⁸ El congreso fundador de la CAOI se realizó en Cusco entre los días 15 al 17 de julio de 2006. Participaron los representantes de los pueblos indígenas quechua, kichwa, aymara, mapuche y otros de origen andino. Se reunieron en defensa del espacio ecológico de sus pueblos y fueron apoyados por parte del movimiento indígena amazónico en su lucha por el reconocimiento de los derechos colectivos. Las organizaciones convocantes fueron la Confederación de las Nacionalidades y Pueblos Kichwas del Ecuador (ECUARUNARI), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMAQ, Bolivia) y la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI).

Estas tres organizaciones están en contacto desde el año 1988, facilitando el intercambio de experiencias, reflexiones y conclusiones entre los líderes indígenas de la zona andina. Uno de los primeros llamados a la coordinación de los movimientos indígenas andinos se concretó en la propuesta de Nina Pacari Vega para que sea elegida como miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU en representación de los pueblos indígenas andinos de Perú, Bolivia y Ecuador. En julio del año 2004 se realizó la II Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala (América), cuya conclusión fue:

crear un espacio permanente de enlace e intercambio, donde converjan experiencias y propuestas, para que nuestros pueblos y nacionalidades enfrenten juntos las políticas de globalización neoliberal (texto de la resolución de la cumbre).⁹

Cumpliendo con este mandato, ECUARUNARI y CONACAMI convocaron en agosto del mismo año la Primera Reunión de Líderes Indígenas Andinos con la finalidad de discutir los principales retos y oportunidades para desarrollar un proceso de consultas nacionales y crear una coordinación de organizaciones indígenas de los Andes, iniciando a la vez, un debate sobre la unidad dentro de la diversidad andina.

8 <www3.minkandina.org consultado> (abril 2008).

9 <www.cumbrecontinentalindigena.org/kitu.php> (abril 2008).

Como antecedente de este proceso, se considera al V Foro Social Mundial de Porto Alegre en el año 2005 como una de las primeras manifestaciones para la coordinación internacional entre organizaciones indígenas de los Andes, evento que fue convocado por la entonces Coordinadora Andina y la COICA. Siguió la participación de la Coordinadora Andina en el VI Foro Social Mundial de Caracas y el II Foro Social de las Américas donde se debatieron temas como tierras, territorio, militarización y autonomía en relación con los pueblos del Abya Yala. En Octubre del año 2005, se realizó en la ciudad de Lima la Primera Asamblea de Nacionalidades y Pueblos Indígenas Andinos a la cual asistieron más de 120 líderes andinos. Esta asamblea inició el proceso definitivo hacia la constitución de la Coordinadora Andina, y ratificó la inclusión del pueblo mapuche representado por la Coordinación de Identidades Territoriales Mapuche (CI-TEM, Chile), así como de los pueblos indígenas de Colombia organizados en la ONIC.

Los ejes del trabajo de la Coordinadora Andina, según la Declaración del Cusco, son:¹⁰

- defender la tierra, los territorios y una regulación ecológica y sostenible como pilares para defender los derechos indígenas;
- contribuir a la construcción de Estados plurinacionales y sociedades interculturales, a través de las asambleas constituyentes con representantes legítimamente elegidos por los pueblos;
- luchar por la implementación de los derechos colectivos;
- concertar medios y esfuerzos entre las organizaciones indígenas de los países de Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Chile;
- analizar la problemática de los tratados de libre comercio y la defensa de los recursos naturales;
- consolidar las propuestas desde la visión andina ante diversas instancias internacionales en las cuales participan los pueblos indígenas de la zona;
- coordinar las acciones de incidencia política a nivel internacional para garantizar una representación legítima de los intereses de los pueblos indígenas andinos.

10 <www.boltxe.info/berria/?p=2604> (abril 2008).

Después de fundar la CAOI, ésta se involucró en octubre del año 2007 en el acuerdo de asociación entre la Comunidad Andina (CAN) y la Unión Europea (UE), y se pronunció, además, respecto del creciente involucramiento de varios Estados de Europa en la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Según la CAOI, tanto las relaciones comerciales como las de cooperación económica entre ambas regiones están marcadas por desequilibrios que causan enormes impactos sociales, culturales y ambientales. Si se comparan las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio que sostienen Perú y Colombia con los Estados Unidos no existen muchas diferencias con respecto a las establecidas con la UE. Esto, sin embargo, contradice el discurso de la UE según el cual los acuerdos de asociación entre la UE-CAN serían diferentes de aquellos con los TLCs por incluir, además del elemento comercial, los componentes de cooperación y diálogo político. Muy por el contrario, la UE está apoyando megaproyectos en zonas de alta fragilidad social y ecológica y poniendo énfasis en el fomento de agrocombustibles, cosa que impacta a pueblos indígenas con altos índices de exclusión que habitan esas zonas.

La Organización Indígena Chiquitana (OICH) mostró a través de un informe sobre la carretera de Puerto Suárez a Santa Cruz (Bolivia), que los impactos sociales y ambientales de su construcción serían extremadamente negativos. Justamente dicha carretera es de uno de los proyectos de cooperación más grandes de la Unión Europea en Sudamérica, y ha sido presentado como ejemplo de que es posible implementar un macroyecto de infraestructura con impactos sociales y ambientales mínimos. Según el informe de la OICH esta pretensión no solo no se está cumpliendo sino que además muestra que la IIRSA fomenta el cultivo de agrocombustibles y la deforestación.¹¹ Los afectados por estos procesos son los pueblos indígenas en las zonas correspondientes que, entre otras cosas, se ven perjudicados en la obtención de alimentos y cuyas protestas y demandas son criminalizadas, especialmente aquellas relacionadas con la extracción de los recursos naturales, específicamente en Perú, Chile y Colombia. La UE y las empresas europeas tienen intereses particulares en esta extrac-

11 OICH (2008); *IIRSA: ¡Desarrollo para la Vida, no para las mercancías y la muerte!*, Resolución de Pueblos Indígenas sobre el IIRSA, 07.03.2008 (<www.constituyentesoberana.org/3/pronunciamentos/032008/070308_1.html>; abril 2008).

ción. Al mismo tiempo, no se han establecido mecanismos suficientes ni de consulta ni de información, descuidando o aún negando los derechos existentes de los pueblos indígenas, por ejemplo, a través del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional de Trabajo).

Por estas razones la CAOI busca establecer pautas para un desarrollo diferente y reformular la IIRSA, empezando a nivel del discurso. Para tal efecto, se organizó en Lima el Foro Internacional de Pueblos Indígenas en vistas a la Cumbre de los Pueblos.¹² La CAOI, en conjunto con las organizaciones indígenas de Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Bolivia y Perú¹³ se reunieron en Lima para discutir una posición y agenda indígena que sirva de referencia para el debate político en sus países y para construir su alternativa. El programa puso énfasis en una modernización y cooperación a nivel internacional basada en las cosmovisiones indígenas. El Foro discutió, además, sobre la era del post neoliberalismo y de cómo incluir los conceptos de la Madre Tierra y del Buen Vivir.¹⁴ Otro aspecto de una agenda indígena propia tanto a nivel nacional como internacional es el desarrollo de un Estado plurinacional comunitario y de una democracia participativa.

De manera similar, en el contexto del acuerdo CAN-UE, la CAOI demandó a la Unión Europea exigiendo condiciones favorables para un “comercio justo” que sea ambientalmente sostenible y dotado de condiciones laborales justas. Este acuerdo tendría que tener en cuenta los mecanismos de consulta y participación de los pueblos indígenas incluso en el marco de las negociaciones entre la UE y la CAN, además de promover la aplicación del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, que por lo general son ignorados en este tipo de acuerdos comerciales. Asi-

12 El Foro (Cumbre Indígena) se ha desarrollado entre el 12 y 13 de mayo 2008 en el marco de la Cumbre de los Pueblos que tuvo lugar entre el 13 y 16 de mayo, promovida por organizaciones y movimientos sociales opuestos a la globalización de índole neoliberal. Ambos eventos han precedido a la cumbre de dignatarios de América Latina y del Caribe y de la UE que se reunieron el 16 de mayo 2008 en Lima para discutir la alianza estratégica entre las regiones y que forma parte del proceso hacia la firma de un Tratado de Libre Comercio entre la CAN y la UE.

13 Entre otros la Coordinadora Nacional de Comunidades del Perú, la CONAIE, la Confederación de Pueblos Kichwa de Ecuador, y el gobernador del pueblo Guambiano de Colombia.

14 Por ejemplo, aspectos de territorialidad y el respeto a los recursos naturales; véase Daes (2000).

mismo, la CAOI busca una coordinación directa entre la UE y las organizaciones indígenas e intenta establecer una Embajada Indígena en Bruselas.

Más bien informales son otros numerosos intentos de cooperación interandina para que la zona se desarrolle según las pautas de la población indígena. Uno de los intentos es establecer un Parlamento de la Nación Aymara (Aymar Jach'a Ulaqa), institución que comenzaría como organización no gubernamental (ONG), ya que la idea sugiere una institucionalidad aún no existente y una representatividad que tampoco corresponde a la realidad actual.¹⁵ El nombre Parlamento Aymara, por otra parte, hace hincapié en la forma organizativa histórica de tratamientos de problemas involucrando a diferentes actores que tratan de resolverlo de manera conjunta.

La idea del parlamento se manifestó por primera vez en la localidad de Janq'uchullpa del Departamento de Tacna (Ayllu Janq'umarka, Perú). En junio de 1996 se convocó al Consejo de Mallky y Amawtas para que las comunidades de lengua aymara participaran ofreciendo un seminario que trató sobre derechos humanos y derechos indígenas. En él participaron representantes de comunidades de Jancko Marka (Perú), Charaña (Bolivia) y comunidades de Chile. Es de señalar que el lugar se encuentra en el tripartito Perú-Chile-Bolivia.

El seminario se centró en la discusión de un proyecto trilateral propuesto por el Estado peruano que pretendía regular las aguas a través de la construcción de una gran represa¹⁶ que hubiera afectado sobre todo la cuenca del río Mauri, alterando el flujo de este río y el de sus afluentes provocando así un desequilibrio ecológico. Este proyecto amenazaba toda la región alrededor de las montañas del Qhanti por restringir el acceso a agua fluyente y al usufructo de aguas del subsuelo, amenazando el modo de vida de los aymara y sus tierras de pastoreo. El proyecto no preveía mitigación ni rehabilitación alguna. Los pobladores temían la desecación como ya había ocurrido en un caso

15 <www.puebloindio.org/Parlamento_Aymara/Parlamento_Aymara.htm> (mayo 2008).

16 Estaba prevista la construcción de túneles transandinos, represas, canales de aducción, diques, estaciones de bombeo, perforación y explotación de agua subterránea con fines de abastecimiento a empresas agrícolas e industriales en las costas del Pacífico del Perú y de Chile. El apoyo financiero y técnico provendría de la *Comunidad Europea*.

similar del mismo Ayllu Janq'umarka, tras el cual los bofedales han quedado resquebrajados por la sequedad, causando la emigración y el abandono de las tierras.

Este seminario y los siguientes discutieron el tema de la defensa del agua, de la biodiversidad andina, del derecho de los pueblos indígenas y su desarrollo con una perspectiva regional genuina. A través del concepto de un parlamento aymara se intentaba recuperar la cultura del agua y de las identidades hidráulicas locales de la región andina que hasta hoy han jugado un papel importante en la gestión interna del recurso hídrico. Los participantes decidieron generar una plataforma que les permitiera organizarse para tales objetivos y la denominaron Parlamento de la Nación Aymara. Su agenda incluye elevar la situación al conocimiento de las Naciones Unidas y denunciar a los gobiernos del Perú y de Bolivia por no haberse atendido a las obligaciones establecidas en el Convenio 169 de la OIT. La denuncia se centra particularmente en la falta de un procedimiento de consulta (art. 6 del Convenio 169) y de consentimiento previo, libre e informado, establecido en la Declaración de la ONU, ya que el diseño del proyecto no se había dado a conocer públicamente como tampoco lo había sido el estudio del impacto ambiental. Finalmente, los participantes decidieron organizar no sólo la protesta sino que también propusieron buscar la restitución de una autoregulación regional y recuperar los derechos y las libertades consuetudinarias. A éste le siguieron otros encuentros como la III Asamblea del Parlamento Aymara aunque, finalmente, el proyecto se realizó en dimensiones bastante menores a causa de la protesta. Sin embargo, el parlamento sigue obrando como instrumento de intervención en el debate para recuperar un concepto de desarrollo a nivel regional basado en las pautas culturales de los pueblos indígenas.

Hay muchos otros intentos de reconstrucción del espacio político, social, económico y cultural para poder tomar decisiones según pautas y medios propios. Como muestra elegida al azar se puede nombrar, asimismo, la Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos (CAPAJ)¹⁷ o el Grupo de Aymara en la región peruana del lago Titicaca (García/Lucero 2004). Ambos se centran en

17 <www.capaj.galeon.com> (mayo 2008).

temas de derechos humanos y en el proceso de legitimación de una regulación y de una cooperación andina.

4. Conclusiones

Aunque las comunidades indígenas de los Andes vivan dispersas y sus intentos de organizarse y coordinarse para sostener otro tipo de organización social sean débiles, lo dicho anteriormente ilustra que sí se efectúa y que se disponen de varios instrumentos capaces de generar una cooperación interandina desde la perspectiva indígena. Hay una coordinación para organizar la protesta e involucrarse en el discurso sobre el futuro del Estado y de la región en base a la reorganización de la zona andina bajo pautas culturales indígenas. Las formas de coordinación existente, además, contribuyen a incrementar la participación activa de la sociedad civil en cuestiones de desarrollo. Las entidades territoriales indígenas son el objetivo al que se llega a través de una sociedad civil activamente involucrada que se constituye, a la vez, como instrumento y como base coordinadora.

Existe, efectivamente, una cooperación indígena andina que tiene como objeto proponer otro concepto de utilización de los recursos naturales e de regulación autónoma tanto a nivel constitucional como en la práctica cotidiana. Éste es uno de los ejes de su formación política. El otro eje apunta a tener una incidencia política en el marco de los derechos humanos, al legitimar sus actividades dentro de la ley y dentro del marco del derecho internacional. Por eso concluimos que la discusión de las culturas políticas en la zona andina se está constituyendo como tercer actor político a nivel internacional, lo que le permitirá interactuar con los Estados y con las empresas privadas.

Al mismo tiempo, para las comunidades y organizaciones indígenas estas actividades y experiencias actúan como instrumento de reflexión sobre su propio desarrollo, sobre el acceso apropiado y genuino a las tierras y a los recursos y constituyen una oportunidad para socializar los errores y éxitos y encontrar propuestas desde sus propias realidades, dentro de un contexto en el cual el CAN, el ALCA, los Tratados de Libre Comercio y otros actores e instituciones de esta índole ya están promoviendo y actuando hacia una integración andina bastante diferente.

A pesar de que sigan existiendo los factores que mantienen a las comunidades indígenas dispersas y segregadas y limitando hasta ahora la perspectiva en términos reales, los intentos de cooperación indígena interandina tratan de visibilizar la presencia indígena andina en diversas instancias nacionales e internacionales y de fortalecer los procesos organizativos internos para tener alguna posibilidad de ofrecer opciones alternativas y una propia agenda a la integración que se está llevando a cabo. Esto conlleva necesariamente una racionalidad de organización que no es netamente indígena pero que es indispensable para establecer el intercambio con las élites de la región. Aunque estos intentos aún sean débiles deberíamos recomendarles a las élites –no solamente de la región andina– que los tomen en serio. Los conflictos recientes en Bagua (Perú), aunque en tierra baja, demuestran que constituyen un núcleo explosivo, particularmente, cuando se les niega cualquier tipo de consulta y participación, debiendo ser ésta la base para cualquier coordinación y cooperación.

Bibliografía

- Alarcón, Tomás (2008): *Comunidades Locales, Cambio Climático, Pobreza y Migración. Retos Legales y Recomendaciones*. Ponencia presentada al UN Social Forum. Genève, septiembre 2008.
- Albó, Xavier (1991): “El Retorno del Indio”. En: *Revista Andina*, 9, 2, pp. 299-345.
- Alvarez, Sonia/Dagnino, Evelina/Escobar, Arturo (eds.) (1998): *Cultures of Politics, Politics of Culture*. Boulder: Westview Press.
- Barié, Cletus Gregor (²2003): *Pueblos Indígenas y derechos constitucionales en América Latina: un panorama*. México, D.F.: Instituto Indigenista Interamericano.
- Bennett, David (1998): *Multicultural States. Rethinking Difference and Identity*. London: Routledge.
- CAOI (Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas)/CONACAMI (Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería) (2009): *Observaciones de las organizaciones indígenas al informe del estado Peruano ante el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial*. Documento CERD/C/PER/14-17. Genève: Naciones Unidas.
- Daes, Erica-Irene A. (2000): *Human Rights of Indigenous Peoples. Indigenous Peoples and their Relationship to Land*. Documento E/CN.4/Sub.2/2000/25. Genève: ONU.
- Feldt, Heidi (2004): “Bodenschätze auf indigenem Land”. En: GTZ (ed.): *Indigene Völker in Lateinamerika und Entwicklungszusammenarbeit*. Eschborn: GTZ, pp. 100-117.

- GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) (2004): *Indigene Völker in Lateinamerika und Entwicklungszusammenarbeit*. Heidelberg: Kasperk.
- García, María Elena/Lucero, José Antonio (2004): “¿Un País sin Indígenas?: Rethinking Indigenous Politics in Peru”. En: Postero, Nancy Grey/Zamosc, León (eds.): *The Struggle for Indigenous Rights in Latin America*. Brighton/Portland: Sussex Academic Press, pp. 158-188.
- Hampson, Françoise (2005): *The Human Rights Situation of Indigenous Peoples in States and Other Territories Threatened with Extinction for Environmental Reasons*. UN-Dokument E/CN.4/Sub.2/2004/CRP.1 and E/CN.4/Sub.2/2005/28.
- Herrera, Alejandro (2003): *Políticas Públicas y el Movimiento Mapuche en Chile*. Manuscrito presentado al seminario internacional “Movimientos Indígenas y Estado en América Latina”. Cochabamba, Bolivia, mayo 2003.
- Herrera Sarmiento, Enrique (2003): *La nueva legislación agraria boliviana y la construcción de lo “Tacana” en el norte amazónico*. Manuscrito presentado al seminario internacional “Movimientos Indígenas y Estado en América Latina”. Cochabamba, Bolivia, mayo 2003.
- OHCHR (Office of the High Commissioner for Human Rights) (2008): *International Workshop on Natural Resource Companies, Indigenous Peoples and Human Rights: Setting a Framework for Consultation, Benefit-Sharing and Dispute Resolution*. Documento IPMU/RRDD. Moscú, diciembre 2008.
- ONU (Organización de Naciones Unidas)/Comisión de Derechos Humanos (2002): *Report of the Workshop on Indigenous Peoples, Private Sector, Natural Resources, Energy and Mining Companies and Human Rights*. Documento E/CN.4/Sub.2/AC.4/2002/3. Genève: ONU.
- Otero, Gerardo (2003): “The ‘Indian Question’ in Latin America. Class, State and Ethnic Identity Construction”. En: *Latin American Research Review*, 38, 1, pp. 248-267.
- Postero, Nancy (2004): “Articulations and Fragmentations: Indigenous Politics in Bolivia”. En: Postero, Nancy Grey/Zamosc, León (eds.): *The Struggle for Indigenous Rights in Latin America*. Brighton/Portland: Sussex Academic Press, pp. 189-216.
- Postero, Nancy/Zamosc, León (2004a): “Indigenous Movements and the Indian Question in Latin America”. En: Postero, Nancy Grey/Zamosc, León (eds.): *The Struggle for Indigenous Rights in Latin America*. Brighton/Portland: Sussex Academic Press, pp. 1-31.
- (eds.) (2004b): *The Struggle for Indigenous Rights in Latin America*. Brighton/Portland: Sussex Academic Press.
- Rathgeber, Theodor (2004): “Plan Puebla-Panamá: Gefährdete Rechte der Ureinwohner”. En: *POGROM – Bedrohte Völker*, 226, 4, pp. 38-40.
- SERVINDI (Servicios en Comunicación Intercultural) (2004): *Los Pueblos Indígenas, el ALCA y los TLC*. Manual de capacitación. Lima.
- Sevilla, Rafael/Ströbele-Gregor, Juliana (eds.) (2008): *Pueblos Indígenas. Derechos, estrategias económicas y desarrollo con identidad*. Bad Honnef: Horlemann.

- Ströbele-Gregor, Juliana (2004): "Indigene Völker und Gesellschaft in Lateinamerika: Herausforderungen an die Demokratie". En: GTZ (ed.): *Indigene Völker in Lateinamerika und Entwicklungszusammenarbeit*. Eschborn: GZT, pp. 1-27.
- Van Cott, Donna Lee (2000): *The Friendly Liquidation of the Past. The Politics of Diversity in Latin America*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Warren, Kay/Jackson, Jean (eds.) (2002): *Indigenous Movements, Self-Representation and the State in Latin America*. Austin: University of Texas Press.
- Young, Crawford (1976): *The Politics of Cultural Pluralism*. Madison: University of Wisconsin Press.
- Zamosc, León (2004): "The Indian Movement in Ecuador: from Politics of Influence to Politics of Power". En: Postero, Nancy Grey/Zamosc, León (eds.): *The Struggle for Indigenous Rights in Latin America*. Brighton/Portland: Sussex Academic Press, pp. 131-157.